EXPEDIENTE No.: ****
QUEJOSO: N1
AGRAVIADA: MENOR: M1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN No.
31/2010
AUTORIDAD
DESTINATARIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA DEL
ESTADO DE SINALOA.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 6 de octubre de 2010

**PROFESORA MAYRA LORENA ZAZUETA CORRALES,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
CULTURA DEL ESTADO DE SINALOA**

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis; 4º Bis A, fracción XIII; 4º Bis B, fracción IV, particularmente el segundo párrafo; 4º Bis C, fracción VI y artículo 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 2º; 3º; 5º; 7º 8º; 16; 28 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 1º; 2º; 46 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, así como 94; 95; 96; 97 y 100 del Reglamento Interior de esta CEDH, ha examinado los elementos existentes dentro del expediente ****, derivado de la investigación iniciada por este organismo estatal, los cuales fueron calificados como violatorios de derechos humanos y atribuidos a personal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa; esto es, a autoridades del orden local por lo que esta Comisión declara su competencia para conocer y resolver sobre los siguientes:

I. HECHOS

A. Que el día 28 de junio de 2010, el quejoso N1 se apersonó en las oficinas administrativas de la Escuela Secundaria ****, para inscribir en **** año a su menor hija M1, manifestándole el Director de dicha institución, profesor N2, que no la podía inscribir hasta que acreditara las materias reprobadas.

B. Que con fechas 13, 16 y 17 de agosto del año en curso, la agraviada M1 realizó los exámenes extraordinarios de las materias reprobadas siendo éstas

las de matemáticas, educación física y formación cívica y ética, acreditando dichas materias.

C. Que con fecha 18 de agosto de este mismo año, nuevamente el quejoso acudió a las oficinas administrativas de la Escuela Secundaria ****, con el propósito de inscribir a su menor hija en **** grado y de nueva cuenta el Director del plantel, profesor N2, le informó que no podía inscribirla ya que tenía puntos acumulados de indisciplina y que tenía que consultarlo con la maestra N3 ya que de ella dependía si la admitía de nuevo o le permitía inscribirla, pidiéndole que regresara el jueves 26 de agosto del año en curso.

D. Que el día jueves 26 de agosto del presente año, aun cuando el quejoso acudió puntualmente a hablar con el director, éste no lo atendió y le pidió que regresara al día siguiente; es decir, el día viernes 27 de ese mismo mes y año.

E. Que el día viernes 27 de agosto del año en curso, el quejoso fue atendido por el Director de la institución educativa en comento, manifestándole que *“no podría inscribir a su menor hija M1 al **** grado”* hasta consultarlo con el Consejo Consultivo Escolar y que lo haría el martes 31 de agosto, por lo que le pidió se presentara el día miércoles 1º de septiembre del año en curso para informarles su decisión.

F. Que el día 1º de septiembre del año que transcurre, el quejoso y su menor hija M1 se presentaron en punto de las nueve horas ante el Director de la Escuela Secundaria y éste personalmente les manifestó que su hija *“ya había causado baja”* y que por lo tanto *“ya no podría inscribirla y que buscara otra escuela”*.

Acto de expulsión con el que el señor N1, padre de la menor, estuvo en total desacuerdo pues consideró que el argumento del Director no fue razón suficiente para que procediera de esa manera.

Un motivo más de inconformidad por parte del padre de la menor, lo constituye el proceder del Director ya que fue llamado vía citatorio el cual le fue enviado por conducto de su hija M1 el día 13 de septiembre para que se presentara el día 14 de este mismo mes a las 14:00 horas para ser atendido por el profesor N2; sin embargo, al llegar a la Dirección de dicha institución educativa, la secretaria a quien nombran B1, se dirigió hacia su persona diciéndole que **el Director no lo podía atender**, pero que le hacía entrega de un oficio de su parte. Refiere que le entregó un oficio sin número fechado ese mismo día donde le informaba el Director multicitado que en reunión de consejo técnico escolar **se acordó que su menor hija M1 había sido dada de baja**, aduciendo que se le habían dado demasiadas oportunidades e infringió el reglamento escolar de

manera constante, y al enterarse el quejoso del contenido del oficio intentó hablar personalmente con él sin que aceptara recibirlo en su oficina.

II. EVIDENCIAS

En el caso las constituyen:

1. Queja interpuesta por el señor N1 ante la Visitaduría Zona Norte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra del Director de la institución, profesor N2, **por dar de baja y negarse a inscribir a su menor hija M1, en la Escuela Secundaria ****.**

La causa de la determinación de darla de baja descrita por el Director, fue que recibió la atención suficiente y se le otorgaron demasiadas oportunidades e infringió el reglamento escolar de manera constante.

2. Con el propósito de reunir mayores elementos para la calificación de la queja, personal de la CEDH se presentó el día 3 de septiembre del año en curso en las instalaciones de la Escuela Secundaria ****, para realizar entrevista personal con el Profesor N2, Director de la Escuela Secundaria ****, quien al momento de conocer el motivo de nuestra visita llamó a comparecer a la profesora N3, quien es coordinadora del grupo de la agraviada, así como a la prefecta N4.

Una vez planteada nuestra intención de solicitarles reconsideraran el dar de baja a la alumna M1, todos coincidieron en que no era posible darle una nueva oportunidad ya que le habían dado muchas oportunidades y también habían incluido y comprometido a sus padres; sin embargo, bajo el dicho de tales servidores públicos, no habían logrado cambios en la conducta de la menor.

Todos refirieron por vía de aclaración que era una alumna muy inteligente, pero que era su mala conducta la que día tras día le acumuló puntos malos que ahora le cerraban la posibilidad de continuar en esa institución educativa.

3. Solicitud de informe mediante oficio número **** de fecha 1 de septiembre de 2010, dirigido al Director de la Escuela Secundaria ****, para que rindiera a este organismo un informe detallado en relación a los hechos citados en líneas anteriores.

4. Acta de hechos elaborada el día 3 de septiembre de 2010 por personal de esta Comisión, en la que se hizo constar la presencia del quejoso, el señor N1, quien compareció para hacer entrega de una constancia expedida por el Director de la Escuela Secundaria ****, en la cual se puede constatar que la menor de edad M1 presentó sus exámenes extraordinarios de regularización de

las asignaturas de Matemáticas II, Formación Cívica y Ética y Educación Física, habiendo obtenido un promedio final de siete.

5. Acta de hechos elaborada el día 6 de septiembre de 2010 por personal de esta Comisión, en la que se hizo constar la presencia del quejoso señor N1, para manifestar que se entrevistó con el profesor N5, quien es Supervisor General de la Zona 01, a la cual pertenece la Escuela Secundaria ****, a quien le planteó la situación de su menor hija M1, por lo que dicho Supervisor giró al Director la referida escuela el oficio número ****, en el cual textualmente le solicita considerar la reinscripción; sin embargo, el quejoso entregó el oficio en comento y no obtuvo ninguna respuesta positiva.

6. Con fecha 10 de septiembre del año en curso se recibió oficio sin número por medio del cual el Director de la institución aludida, dio contestación a la solicitud de informe, negando los hechos que refiere el quejoso, manifestando entre otras cosas lo siguiente:

“...cuando cursaba el **** grado, al finalizar el **** bimestre, por la gran cantidad de puntos acumulados, y por salud y beneficio de su hija, para no pasarla a Consejo Técnico en un futuro inmediato, se le sugirió que la ingresara en el próximo ciclo escolar en otra escuela, porque ya eran demasiadas las inconformidades de los docentes con las acciones y actitudes de su hija, esta sugerencia se reiteró en el mes de Junio, al finalizar el **** bimestre, debido a que su hija continuaba en plena rebeldía de no acatar las órdenes que se le daban, incluso en una ocasión, estando en trabajo comunitario, debido a una falta menor, fue sorprendida rayando paredes que recientemente habían sido pintadas. Como consecuencia de esto se les informó a los padres que pasaría a Consejo Técnico en cuanto se iniciara el próximo ciclo escolar”.

Por todo esto el día 31 de Agosto el Consejo Técnico Escolar, en plena reunión, tomó la decisión de dar de baja a la alumna M1, por considerar que se le dieron demasiadas oportunidades y no las aprovechó y que la alumna ponía en riesgo la estabilidad de la disciplina escolar de toda la institución”.

7. Con fecha 13 de septiembre del año en curso, se giró el oficio número ****, mediante el cual se solicitó copia certificada del acta que levantó el Consejo Técnico Escolar en la que se tomó el acuerdo de dar de baja a la alumna M1.

8. Acta de hechos elaborada con fecha 14 de septiembre del año en curso en la que se hizo constar la comparecencia del quejoso para manifestar que acudió a

la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, para entrevistarse con la titular de esa Secretaría, a fin de solicitarle su intervención; sin embargo, no le fue posible verla personalmente por lo que lo atendió el secretario particular de la misma, a quien le hizo entrega de un oficio sin número dirigido a dicha titular, el cual le fue sellado de recibido con fecha 13 de este mismo mes y año.

9. Que con fecha 14 de septiembre del presente año se recibió oficio sin número dirigido por el profesor N2, Director de la escuela mencionada, en el cual se anexó el Acta de Asamblea del Consejo Técnico Escolar de fecha 31 de Agosto de este mismo año, en la cual se puede apreciar entre otros elementos, la decisión de dicho Consejo de dar de baja a la alumna M1, fundamentada en la acumulación de 288 puntos en el ciclo escolar anterior.

Asimismo refiere que la admisión de la alumna sería romper con la disciplina escolar y que no se debe permitir que se rompa con los seguimientos y el excelente trabajo que se les lleva a los demás estudiantes.

10. Que en esa misma fecha 14 de septiembre, mediante oficio **** de la Visitaduría Zona Norte de esta CEDH, se solicitó al Director de la Escuela Secundaria ****, aplicara medidas cautelares o precautorias consistentes en respetar el lugar que como estudiante de esa escuela debería sostener la menor de edad M1 (sobre todo porque la menor no se encontraba estudiando en ninguna institución educativa), así como darle el trato igualitario que como cualquier otro estudiante de dicha institución educativa debe tener con todos los derechos que ello implica.

11. Acta de hechos de 14 de septiembre del año en curso en la cual se hizo constar la comparecencia del quejoso con el fin de informar a esta CEDH, que le notificaron mediante oficio sin número, firmado por el Director N2, que su hija M1 se dio de baja por acuerdo unánime del Consejo Técnico Escolar, según acta de asamblea de fecha 31 de agosto del presente año.

12. Que con esta fecha 14 de septiembre del año en curso, se recibió oficio sin número, suscrito por el Director de la multicitada institución educativa que nos ocupa, en el cual se dio respuesta a las Medidas Precautorias o Cautelares solicitadas por esta CEDH, la cual fue en sentido negativo, ya que manifestó que el Consejo Técnico Escolar es el organismo que tomó la decisión de dar de baja a la menor M1, además de que debe respetar sus decisiones, por lo que la alumna no debe permanecer en la institución desde el momento en que los padres de la misma hayan sido notificados de la baja.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Se hizo saber a esta CEDH, que el día 1o. de septiembre de 2010, a la menor M1 se le negó el derecho a reinscribirse en **** grado en la Escuela Secundaria ****, manifestándole el Director de dicha institución educativa que ya había causado baja y que buscara otra escuela.

En su informe el Director manifestó que fue decisión del Consejo Técnico Escolar, reunido en pleno el día 31 de Agosto del presente año, el dar de baja a la alumna M1 por considerar que le dieron demasiadas oportunidades y no las aprovechó y que la alumna ponía en riesgo la estabilidad de la disciplina escolar en toda la institución.

Asimismo y de manera contradictoria refirió el Director en su informe a este organismo que se aceptó la inscripción de la alumna en mención “debido a que ya había acreditado las materias que adeudaba y el quejoso pagó la cuota de padres de familia”; sin embargo, se le había dicho que al inicio del ciclo escolar se pasaría a Consejo Técnico Escolar.

Siendo de suma importancia para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos salvaguardar el derecho a la educación que merece la agraviada, el día 3 de septiembre de 2010, Visitadores Adjuntos de este organismo se apersonaron en la Escuela Secundaria ****, por lo que el Director, acompañado de la coordinadora de grupo y la prefecta, les informaron que la alumna en cuestión era muy inteligente pero que su conducta en el ciclo anterior le acumuló puntos que le cerraban la posibilidad de continuar en esa institución educativa; sin embargo, en ningún momento establecieron el procedimiento que se siguió para tomar la determinación de dar de baja a la alumna.

Ante tal situación, el quejoso acudió a solicitar ayuda ante el Supervisor General de la Zona Escolar 01, el profesor N5, ya que a esta zona pertenece la Escuela Secundaria ****, quien inmediatamente giró el oficio número ****, en el cual entre otras cosas textualmente dice:

“Mucho agradeceré considerar la reinscripción de la C. M1 considerando el elemental derecho que esta joven tiene de proseguir sus estudios, recibir del personal de la escuela un trato decoroso y apoyo necesario para resolver sus problemas, **además de la imposibilidad de darle de baja si no media el trámite correspondiente ante la autoridad jurídica de la Secretaría**”.

Sin embargo, el contenido de dicho oficio no causó ningún impacto en el Director ya que al recibirlo no modificó en absoluto la decisión de dar de baja a la alumna agraviada.

Por otro lado, este organismo solicitó al Director de la Escuela Secundaria **** que atendiera Medidas Precautorias o Cautelares tendientes a salvaguardar el derecho a la educación de la menor multicitada, pero en respuesta manifestó entre otras cosas lo siguiente:

“... el consejo técnico escolar es el organismo que tomó la decisión (SIC) de dar de baja a la menor M1 y debo respetar sus decisiones, esto implica que la ex alumna no debe permanecer en nuestra institución desde el momento en que sus padres han sido notificados”.

Esta circunstancia provocó que con fecha 14 de septiembre del presente año el quejoso recibiera notificación por escrito en la cual se le hizo saber que su menor hija M1, había sido dada de baja de la institución educativa por acuerdo del Consejo Técnico Escolar en asamblea realizada el día 31 de agosto del presente año.

Dicha decisión es aducida por el Director de la Escuela, con sustento en los acuerdos internos ya mencionados de la institución educativa, así como la aplicación de un reglamento interno; en consecuencia, es importante identificar si con base en dichos acuerdos y su reglamento interno se reúnen los elementos mínimos de legalidad en cuanto a su alcance y si los mismos afectan los derechos humanos de la alumna en mención.

Por los elementos probatorios que integran el expediente en relación a los hechos sometidos a su competencia, se determina por esta CEDH la certeza de los mismos, ya que se advierte que la decisión del Director, aún cuando él delega esa responsabilidad al Consejo Técnico Escolar, fue realizada en términos y fundamentos de un reglamento interno, documento del cual se cuestiona su validez por repercutir en una decisión contraria a la voluntad expresada por las normas constitucionales de nuestro país y de Sinaloa, en cuanto a la afectación del interés superior del niño, plasmado en diversos tratados internacionales y de manera particular en la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Se considera en consecuencia que dicho acuerdo tomado por el Consejo Técnico Escolar se constituye en un acuerdo administrativo tomado por el Director y maestros que forman parte, el cual generó un perjuicio a la menor, coartándole con esa decisión la oportunidad de asistir a ese plantel educativo.

En esta tesitura habremos de señalar que el 26 de mayo del año 2008, fueron publicadas en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, Órgano Oficial del Gobierno del Estado, importantes reformas constitucionales locales en materia de derechos humanos, que a continuación se transcriben a la letra:

“Art. 1o. El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes.”

Art. 4° Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, así como de los previstos en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de su solidaridad hacia la familia, los más desfavorecidos y la sociedad.

Artículo 4° Bis A. Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos por esta Constitución:

.....

XIII. Los niños son titulares de derechos y no solo objeto de protección. En los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal, atendiendo a las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el desarrollo de éstos.

Artículo 4° Bis B. El Estado tomará las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los siguientes derechos y deberes:

.....

IV. Los habitantes en el Estado tienen el derecho a disfrutar una vida libre de violencia. La ley establecerá las bases de la actuación de las autoridades para prevenirla y atender a las personas que sufran de ella, así como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la generan, poniendo especial atención en la erradicación de la violencia intrafamiliar.

Artículo 4° Bis C. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Constitución se interpretarán de acuerdo con los siguientes principios:

I. Los derechos humanos deben interpretarse evitando la contradicción con el texto constitucional y propiciando el sentido que le sea mas favorable.

II. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

.....

V. Se deberá optar por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su progresividad.

VI. El interés superior del niño deberá tener consideración primordial por parte de los tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, así como en todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social. Dicho deber implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”

Estos derechos reconocidos por nuestra Constitución local vinculan y se constituyen como una obligación directa de toda autoridad gubernamental, específicamente en lo que atañe a la protección de los derechos de los niños y niñas a efecto de materializar el principio internacional “*del interés superior del menor*”, más aún tratándose de casos como el que nos ocupa.

IV. OBSERVACIONES

Antes de entrar al estudio de las violaciones a los derechos humanos que como resultado dieron origen a la presente Recomendación, manifestamos que este organismo estatal se pronuncia porque los servidores públicos con facultades para hacer cumplir la ley, realicen su deber siempre y cuando tales actos se efectúen conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, y en las leyes y reglamentos aplicables.

Ahora bien, del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que nos ocupa, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos pudo acreditar violaciones a los derechos humanos consistentes en el

derecho a la educación como a los derechos de los niños, derivados de actos realizados por el profesor N2, Director de la Escuela Secundaria ****, en agravio de la menor M1, en atención a las siguientes consideraciones:

Al analizar la actuación del Director de la Escuela Secundaria ****, profesor N2, se destaca lo siguiente:

Que con motivo de la comparecencia recibida por el personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos del señor N1, así como lo que obra agregado en el expediente que se resuelve, de lo expresado por ella y en atención a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se solicitó al profesor N2, Director de la Escuela Secundaria **** a través del oficio correspondiente el informe de ley para que manifestara a este organismo lo procedente.

A. Violación al derecho a la educación

Al partir de la premisa de que el Director de la Escuela Secundaria **** tomó la decisión de dar de baja a la alumna M1 como consecuencia de acumulación de puntos por incumplimiento del reglamento escolar por faltas relativas a la conducta de la misma, la decisión correspondiente respecto la expulsión de la menor agraviada, fue sometida a la consideración de un Consejo Técnico Escolar, el cual por unanimidad tomó el acuerdo de darla de baja, aún tratándose de una alumna menor de edad.

Lo anterior evidencia entonces la vulneración de derechos humanos en que se incurrió, primeramente al haber decidido sancionar a la menor multicitada con la baja definitiva de la escuela.

Por lo que hace a los actos del Director que violentaron el derecho a la educación de la menor, es de reprocharse su determinación de sancionarla con una medida que afecta la posibilidad de continuar sus estudios en una escuela y en un medio ya familiar para la menor; aún cuando en todo momento éste negó haber tomado decisiones unilaterales escudándose siempre en que había sometido el caso a la consideración de un Consejo Técnico Escolar.

Así entonces, se deduce que la determinación que tomó el personal docente de la institución educativa en conflicto, tanto por el Director del plantel como del Consejo Técnico Escolar, no fue la más indicada ni mucho menos la más idónea para el caso, ya que si bien es cierto pudo haber incurrido la menor estudiante en mala conducta, para sancionar debidamente se debió de agotar el procedimiento que fija el “Acuerdo número 97, que establece la Organización y

Funcionamiento de las Escuelas Secundarias Técnicas”, el cual en su artículo 59 entre otras cosas, dice:

“...tratándose de casos que a juicio del director del plantel ameriten separación temporal del alumno por más de ocho días hábiles, ésta solo procederá mediante resolución de las autoridades superiores.”

Así también del análisis llevado a cabo en el conflicto que nos ocupa, se advierte que la alumna M1, en todo momento fue sancionada por su supuesta conducta irregular, ya fuese con la acumulación de puntos o con trabajo comunitario; por consiguiente, no es dable que se pretenda sancionar dos veces por una misma conducta y lo que es más grave aún, aplicar una sanción no establecida en la disposición fundada para sancionar, como lo fue el de la baja definitiva de la institución educativa, por lo que resulta por demás fuera de todo orden legal la actuación de los funcionarios públicos señalados como responsables.

Esta Comisión Estatal considera que la sanción fue contraria a la norma, pues se le privó a la menor de referencia el derecho a su educación, el cual con base en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es obligatoria impartirla por el Estado hasta el nivel secundaria.

El servidor público violentó a través de la expulsión, el principio internacional y nacional del “Interés Superior del Niño” pues como bien dispone nuestra Constitución local, toda actividad desplegada por el Estado debe buscar lo mejor para la niñez.

El respeto al interés superior del niño no ocurrió en el caso que nos ocupa, pues el Director mencionado consideró más importante la imagen de la escuela secundaria, que garantizar y preservar el derecho de la menor a la educación.

El propio Director desde un principio debió acogerse al procedimiento sancionador respectivo a que hace referencia el citado Acuerdo 97 en su artículo 59, debiendo acudir ante las autoridades superiores a efecto de que éstas dictaran, después de agotar las instancias, vías y mecanismos correspondientes no contrarios a derechos humanos, la sanción respectiva (*la máxima sanción con base en esta disposición por indisciplina será temporal y podrá ser mayor a 8 días, pero no definitiva*) pero nunca imponerla como se hizo a través de un organismo no facultado para tales efectos como lo es el Consejo Técnico antes señalado.

Consideramos en esta Comisión Estatal que el Director referido está fallando en su responsabilidad como educador, puesto que corresponde a él conminar a los menores a solucionar sus conflictos a través de actos no violentos así como a

educarlos a favor de la paz, tal y como se fundamenta en el propio artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, se ratifica por esta Comisión Estatal que la medida de expulsión fue sumamente desproporcionada y severa ya que a final de cuentas resultó para el Director de la Escuela Secundaria lo más sencillo a sus particulares intereses totalmente discrecionales y faltos de la consecuente legalidad a la que está comprometido para fundar sus actos.

En consecuencia, tal proceder omiso conforme al artículo 78 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se considera necesario que tales hechos sean investigados por el correspondiente órgano de control y de ser procedente se apliquen las sanciones administrativas que conforme a Derecho procedan.

Por lo que hace al actuar del Director del plantel educativo, cuando éste toma unilateralmente la decisión de dar de baja a la menor multicitada y evita su ingreso a la escuela secundaria, dicho servidor público resultó ajeno a su labor como tal al actuar alejado de los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, e inclusive, dicha conducta pudiera encuadrar en el tipo penal de abuso de autoridad considerado en el artículo 301, fracción VII del Código Penal de la entidad que a la letra dice:

“Art. 301. Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que:

I a VI

VII. Ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio de los derechos garantizados en la Constitución Federal o del Estado.”

.....

Como ya se razonó en líneas precedentes, este servidor público violentó el derecho a la educación reconocido tanto en la Constitución Federal como en nuestra Constitución local, además con su conducta violentó también los principios de actuar que deben caracterizar a los servidores públicos, también explicitados en ambos ordenamientos nacionales, por lo que se considera que su conducta puede serle reprochada penalmente.

En virtud de que el derecho a la educación es de suma importancia, las escuelas deben seguir de manera estricta diversas reglas de procedimiento; ello sobre todo, antes de pronunciar una sanción.

El derecho anteriormente mencionado resulta ser tan significativo para los propios encargados de impartirla, siendo en este caso mucho más el compromiso para el Director de la escuela, en su investidura de autoridad superior de la misma.

De igual manera, para poder sancionar a un alumno, las autoridades escolares deben seguir una serie de formalidades esenciales como también lo es para todo procedimiento, cuanto más, sancionarlo con la expulsión del centro educativo.

En razón de lo anterior, el profesor N2, como Director de la Escuela Secundaria y como servidor público que es, tiene el deber de respetar la legalidad en beneficio de sus alumnos.

Igualmente debió buscar una solución adecuada en la que no se viera afectada la menor con dicha baja definitiva.

Lo anterior evidencia de manera muy clara una conducta arbitraria de parte del servidor público de referencia, la cual como ha quedado de manifiesto, transgredió el derecho a la educación que le asiste a todos los mexicanos y que es previsto por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación pre-escolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. “

Lo anterior significa que por ningún motivo deberá privarse a persona alguna de ejercer su derecho a la educación básica, pues como se fundamenta, reviste el carácter de obligatoria para todos los mexicanos y los menos facultados para privar del goce de ese derecho son las propias instituciones educativas, como indebidamente aconteció en el caso que nos ocupa.

Por otra parte, al aplicar el texto que el citado artículo constitucional en su párrafo segundo establece:

“Artículo 3°.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

.....

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;”

.....

Dicho texto marca la directriz a seguir en el ámbito educativo, pues claramente especifica el fin de la educación y por ningún motivo éste se encuentra encaminado a fomentar la mediocridad y el analfabetismo, lo cual es producto de las prohibiciones de este derecho, sino que está en pro del avance científico, al luchar contra la ignorancia y sus efectos.

Para regular tal circunstancia, debe observarse en principio lo estatuido por el citado artículo en su fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual previene que la educación debe estar orientada con aprecio a la dignidad de las personas –considerada ésta como respeto que se debe tener a ellas, lo cual en ningún momento apareció en el evento que nos ocupa, pues lejos de prevalecer el respeto, lo que emergió fue la falta del mismo, privándosele a la menor del derecho a la educación.

Derecho que por ningún motivo está restringido por actos circunstanciales como lo es el de la especie, pues no existe disposición jurídica en materia de derechos humanos que faculte a los encargados de la educación a restringir ese derecho por las causas descritas; sino por el contrario, la finalidad de las autoridades educativas es pugnar por la impartición de la educación en pro del desarrollo cultural y personal de todos los mexicanos.

Resulta evidente que el Director de la Escuela Secundaria al enterarse de lo ocurrido con la alumna, decide alejarla de las aulas de clases; incluso notificándole a su padre que ésta había sido dada de baja, sin interesarle el estado de vulnerabilidad de la menor al dejarla sin el derecho humano a la educación.

Se señala también al multicitado servidor público, que omitió establecer por escrito su resolución, fundarla y motivarla como lo exige el artículo 16

Constitucional que regula los actos de molestia que toda autoridad debe decretar, siempre y cuando su actuar se apegue a Derecho.

Bajo este contexto es innegable que el derecho humano a la educación fue vulnerado por el profesor N2, Director de la Escuela Secundaria ****, del municipio de Ahome, Sinaloa, debido a que su actuación no atendió los requisitos de la fundamentación y motivación que debe contener todo acto emitido por autoridad y no sólo eso, también infringió respecto al citado derecho, lo previsto por instrumentos internacionales, como lo son:

- Declaración Universal de Los Derechos Humanos, artículo 26, Párrafo 2;
- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, artículo 28 y 29;
- Convención por los Derechos del Niño y del Adolescente, numeral 29;
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XII;
- Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículo 13 ,que reconoce el derecho de toda persona a la educación;
- Así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, artículos 13 y 16.

De igual manera, el citado servidor público pasó por alto el punto número 8 de la opinión OC-17/2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 28 de agosto de 2002, que establece:

“Que la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales.

Los Estados Partes en los Tratados Internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”

Igualmente se transgredieron legislaciones del ámbito nacional y local como lo son:

- La Ley General de Educación, artículos 3°, 4° y 8°;
- La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, artículos 23 y 30; y,
- La Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, artículos 6°, 7°, 11, 41 y 109.

De todo lo expuesto y derivado del análisis lógico-jurídico practicado al conjunto de evidencias que obran en el expediente que nos ocupa, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos corrobora la existencia de violaciones al derecho a la educación, contemplados por los artículos 1° y 3° respectivamente de nuestra carta magna, los cuales tenía la obligación de respetarlos el Director de la Escuela Secundaria ****.

Por ello las conductas atribuidas al servidor público de referencia pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2° y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que prevén:

“...será servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los tres Poderes del Estado, así como en los organismos e instituciones de la administración pública paraestatal cualquiera que sea la naturaleza jurídica, estructura o denominación de éstos...;”

Además todo servidor público tendrá la obligación de cumplir:

“...el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.”

B. Violación a los derechos de los niños

Ya se ha hecho referencia de manera concisa en el cuerpo de la presente recomendación respecto del principio del interés superior del niño.

Este principio es reconocido como principio de interpretación de los derechos humanos por el artículo 4° Bis apartado C de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y es en este apartado en el que se determinan las conductas efectuadas por el servidor público multicitado y Director de la escuela, las cuales vulneraron el mencionado principio así como la violación con ello a los derechos de la niña hoy agraviada.

La postura del servidor público encaminada a sancionar un acto por completo fuera de su competencia y resolviendo sin procedimiento previo y de manera unilateral al decretar la expulsión de la hoy agraviada, es un claro ejemplo de vulneración al interés superior del niño, entendido éste como *“el deber que*

implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser considerados como principios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Situación que como ya se expuso no sucedió; por lo que optó por suspender a la menor agraviada su derecho a la educación y no sólo eso, sino que no le brindó el más mínimo derecho a quedarse en la institución educativa.

Actos que no deben tolerarse a servidor público alguno, y mucho menos a quien dirige la vida institucional de un plantel escolar.

No existe ordenamiento alguno que faculte al multicitado Director a actuar como lo hizo, pero sí existen promulgados en cuanto a la obligación de actuar en cabal respeto al interés superior del menor.

Como referencia de ello tenemos:

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

“Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

“Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E. El de tener una vida libre de violencia.

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, estado y sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. “

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa:

“Artículo 6. Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta ley:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión pública o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E. El de tener una vida libre de violencia.

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la Familia, Estado y Sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Artículo 7. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas y programas aplicables a niñas, niños y adolescentes en el Estado, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Este principio orientará la actuación de las autoridades gubernamentales del Estado y de los municipios encargados de las acciones de defensa y representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, protección y participación de las niñas, niños y adolescentes; y deberá verse reflejado en las siguientes acciones:

- a) En la asignación de recursos públicos para programas sociales relacionados con niñas, niños y adolescentes; y
- b) En la formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas con niñas, niños y adolescentes. “

Convención sobre los Derechos del Niño:

“Artículo 3.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. “

Declaración de los Derechos del Niño:

“Artículo 2°. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

Artículo 7°. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.”

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como el artículo 4º Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted como superior jerárquico, señora Secretaria de Educación Pública y Cultura en el Estado de Sinaloa, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se dé inicio al trámite correspondiente de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, a fin de que se impongan las sanciones que resulten procedentes al profesor N2, quien en su carácter de Director de la Escuela Secundaria ****, del municipio de Ahome, Sinaloa, llevó a cabo los hechos investigados y una vez demostrada la responsabilidad administrativa en que, a juicio de esta Comisión incurrió, se le apliquen las sanciones conforme lo dispone el artículo 48 de la citada ley, tanto por la falta de aceptación de medidas cautelares o precautorias como por la expulsión de la niña.

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de llevar a cabo cursos de capacitación y actualización legal sobre la normatividad referente a la educación y sobre los derechos humanos, con la finalidad de erradicar la incidencia de casos como el que nos ocupa y como consecuencia abstenerse de suspender definitivamente a los niños o de imponer cualquier medida que niegue el derecho a la educación; y por otro lado, para que previo a la imposición de la sanción de un alumno, desahoguen de manera puntual un procedimiento legal en respeto a los principios de seguridad jurídica, de proporcionalidad, de dignidad humana, de legalidad, de presunción de inocencia y el principio de audiencia y defensa, al atender además el interés superior del niño.

TERCERA. Gire instrucciones al personal docente correspondiente para que a la menor agraviada en el presente expediente, y en virtud del número de clases perdidas por inasistencia, se le otorguen las facilidades pertinentes para la recuperación de tales clases ocurridas por el tiempo en que la menor ha dejado de asistir a la escuela.

La presente Recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra autoridad competente para que dentro de sus atribuciones apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese a la profesora Mayra Lorena Zazueta Corrales, Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 31/2010 debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computables a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso de negativa, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

En caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese al señor N1, en su calidad de quejoso, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO